

UNA PROPUESTA CONTRA EL PARO

Enric Sanchis

Caítulo final del libro *Los parados. Cómo viven, qué piensan, por qué no protestan*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2016

Si el objeto fuera sólo explicar hechos sociales podríamos poner ahora el punto final, pero como también se quiere contribuir a modificarlos, iremos un poco más allá. Para ello dejaremos en segundo plano el registro científico y adoptaremos el del ciudadano interesado en el buen funcionamiento de la cosa pública.

El drama del paro podría entrar en vías de solución si se repolitizara, esto es, si fuera concebido menos como un problema técnico sólo manejable por expertos y más como un derivado de las relaciones de poder existentes en la sociedad.

Construir una interpretación de este tipo a partir de cosas bien sabidas sobre las crisis económicas en general y la situación española en particular, una interpretación que identifique factores determinantes y apunte soluciones que puedan ser valoradas como factibles por una mayoría ciudadana moderadamente escorada hacia la izquierda, no es demasiado complicado.

Como no se trata de asustar a nadie sino de ganarse aliados, lo haremos sin recurrir a la literatura anticapitalista. Hay más que suficiente con la munición que proporcionan los defensores más lúcidos de la economía social de mercado, es decir, de un capitalismo domesticado por el poder político.

La Gran Depresión de comienzos del siglo XXI tiene su origen último en el aumento de las desigualdades que conocen todas las sociedades avanzadas desde hace cuatro décadas, cuando Thatcher y Reagan comenzaron a poner en marcha sus políticas antisindicales y neoliberales.

No es casualidad que las desigualdades hayan crecido con más fuerza allí donde el sindicalismo ha resultado más debilitado [Pontusson, 2013].

Excesivas desigualdades sociales, además de ser percibidas como injustas por la mayoría de los ciudadanos, ponen en peligro el buen funcionamiento de la economía capitalista.

De hecho, las economías avanzadas más competitivas del mundo son las escandinavas, que son a su vez las sociedades más igualitarias.

Ya Keynes, en el último capítulo de su *Teoría General*, distinguía entre una desigualdad deseable que deriva de la actividad empresarial, en definitiva del mérito y el esfuerzo, y otra indeseable que deriva de la propiedad de la riqueza; y denunciaba que el capitalismo dejado a su aire provoca una “distribución arbitraria e injusta de la renta y la riqueza” que lastra el consumo y el nivel de empleo y por tanto genera paro.

Más recientemente, autores de reconocido prestigio como Stiglitz [2012], Piketty [2014], Atkinson [2015], Navarro [2015] y otros muchos han venido a insistir en lo mismo: demasiada desigualdad amenaza la eficiencia del mecanismo de mercado y la cohesión social, convierte en una quimera el principio de igualdad de oportunidades y socava la democracia liberal. Hasta instituciones tan procapitalistas como el FMI y la OCDE han tenido que advertir en sus últimos informes que si no se reducen las desigualdades el crecimiento económico no podrá alcanzar

el ritmo necesario para que el paro caiga de manera significativa.

En esos mismos informes España queda retratada como uno de los países más desiguales del mundo desarrollado —salvo Reino Unido el más desigual de los grandes países europeos— y aquel donde la distancia entre los que más y menos rentas perciben ha crecido más durante la crisis. Algo que también han puesto de relieve varios informes domésticos (Caritas, Oxfam-Intermón)

Una situación a relacionar con el paro y su baja protección, el empleo precario, las disparidades salariales, el insuficiente desarrollo de los dispositivos del Estado de bienestar, la escasa capacidad redistributiva del gasto público y la regresividad del sistema fiscal.

Dejando aparte el tema del fraude, el IRPF es casi exclusivamente un impuesto sobre los trabajadores asalariados. Éstos pagan proporcionalmente más impuestos que quienes los contratan, y las pequeñas y medianas empresas más que las grandes

Como a paridad de poder adquisitivo los asalariados españoles pagan aproximadamente los mismos impuestos que sus homólogos europeos —quizás sólo un poco menos—, el bajo nivel de presión fiscal (al menos cinco puntos porcentuales de PIB por debajo de la media de la UE-28) se debe a que las rentas del capital pagan muy pocos impuestos.

Esto explica, a su vez, que el gasto público esté igualmente cinco puntos por debajo de la media. Y si la comparación se hace con los países que utilizamos habitualmente como referentes positivos, todavía salimos peor librados, en particular por lo que se refiere al gasto público en servicios sociales: España es el país que tiene el gasto social público per cápita más bajo de la UE-15; y la distancia que nos

separa del nivel medio no se puede justificar por la diferencia en riqueza per cápita, ya que ésta es mucho menor.

Nos encontramos así con un sector público pequeño en términos de gasto y escasamente desarrollado en términos de empleo. Es radicalmente falso que en España haya demasiada gente en la nómina del Estado.

Todo lo contrario. De acuerdo con la EPA, en 2007 sólo el 14,50% del empleo total era público (16,86% en 2014 a causa de la fuerte caída del empleo en el sector privado), mientras que en los países europeos más desarrollados esta proporción supera en mucho el 20% y en algunos casos el 25%. Cosa distinta es cómo está distribuido funcionalmente ese empleo, pero en lo que hace al Estado de bienestar el déficit es incuestionable. Para acercarnos a los estándares europeos necesitamos más gente trabajando en educación, atención a las personas dependientes, sanidad.

Todo esto ha sido escrito y publicado en más de una ocasión, por ejemplo por Navarro, Torres y Garzón [2011], y tomado en su conjunto es uno de los factores más relevantes en la explicación de por qué nuestro nivel de paro es tan elevado desde hace más de treinta años.

Una causa inequívocamente política (no técnica) a relacionar con el grado de influencia sobre las grandes decisiones públicas de que disponen los distintos grupos de interés, y que señala al mismo tiempo por dónde pueden venir las soluciones al problema.

Nunca se insistirá lo suficiente en que —al menos en el caso de España— existe una relación clara entre presión fiscal baja, escasa progresividad del sistema impositivo, bajo gasto social, poco empleo público y altos niveles de pobreza, desigualdad y paro.

Sin embargo esta interpretación no acaba de llegar a la opinión pública. Dando por descontado que la ideología neoliberal con sus fundaciones productoras de pensamiento y plataformas masmediáticas juega en contra, a nuestro juicio ello hay que relacionarlo con la falta de un actor social con el poder suficiente para neutralizarla; un actor capaz de sintetizar la interpretación alternativa en una demanda clara al sistema político y dispuesto a plantearla sin timidez cuantas veces sea necesario, desde la convicción de que la razón está de su parte.

Demanda: creación a lo largo de una legislatura de *un millón de empleos públicos* como medida de choque contra el paro y las desigualdades en todos aquellos servicios en los que estamos particularmente mal dotados. Es el caso, por ejemplo, de la primera etapa de educación infantil, definida en la LOGSE de 1990 y nunca desarrollada; también de la secundaria obligatoria, donde tenemos tasas de fracaso y abandono sin parangón en ningún otro país de la OCDE. Mientras no tapemos estos hoyos el camino a la economía del conocimiento resultará impracticable.

Un millón de empleos públicos no es una cantidad desorbitada (el sector privado debería crear al mismo tiempo unos cuatro millones de empleos para acercarnos a algo parecido al pleno empleo). En el supuesto improbable de que el empleo privado no se viese positivamente afectado, sobre los datos de 2014 significa que sólo el 21,40% del empleo total sería público, todavía muy por debajo del que soportan esos países que tanta envidia nos dan.

Y podrían financiarse sin aumentar la deuda ni el déficit públicos con un sistema fiscal más progresivo (ese que proponen los socialistas cada vez que están en la oposición) y menos fraude.

Claro que tal medida podría provocar efectos no deseados sobre otros parámetros macroeconómicos, pero llevamos no años sino décadas utilizando tales efectos como excusa para no enfrentar el problema sin reservas, y las consecuencias están a la vista ¿Alguien duda de cómo reaccionaría el responsable de la política económica si tuviéramos pleno empleo y un 20% de inflación? Inviértase pues el orden de prioridades y colóquese el drama del paro de una vez en el centro de la agenda política.

¿Quién en mejor posición que los sindicatos de clase para encarnar ese actor social? Un millón de empleos públicos podría ser el eje de un programa reivindicativo similar a los que elaboraron en 1989 (Propuesta Sindical Prioritaria) y 1991 (Iniciativa Sindical de Progreso) tras el 14-D de 1988. Para compensar su debilidad, ganar potencia de voz y credibilidad, podrían buscar el apoyo de un movimiento de parados dispuesto a hacer ruido periódica y sistemáticamente, por ejemplo delante de los ayuntamientos de los cien municipios donde el problema sea más grave. Levantar un movimiento de este tipo no es fácil.

Hace falta mucha paciencia, invertir recursos, dedicación militante, blindarse contra el desánimo, disponer de una perspectiva a medio plazo. Pero puede intentarse. Para comenzar, tendrían que conseguir que calase en la opinión pública el mensaje de que ellos son los defensores por excelencia de los intereses de todos los trabajadores, no sólo de los ocupados estables, también de los precarios, de los parados, de los jubilados, incluso de todas esas amas de casa excluidas del trabajo remunerado a causa del raquítrico desarrollo de la ley de dependencia. A continuación habrían de actuar en consecuencia reajustando sus estructuras internas a fin de, por una parte, aumentar la influencia de los colectivos más débiles y peor representados en ellas; y por otra, revitalizar las uniones territoriales para recuperar aquella complicidad con el

movimiento vecinal que llegó a haber durante la Transición y en los años inmediatamente posteriores, cuando la doble militancia era frecuente y en algunas asociaciones de vecinos llegaron a crearse vocalías de parados.

Al parado no pueden encontrarlo en el centro de trabajo, pero sí en el barrio, como al ocupado (precario o no) en esas pequeñas empresas cerradas a la acción sindical. Y por supuesto hay que echar una mano (no ignorar) a los pocos colectivos de parados organizados que ya funcionan.

A pesar de todas las dificultades, los sindicatos juegan con algunas bazas a su favor. Como hemos visto, muchos de nuestros parados esperan cosas de ellos, y los ocupados precarios no los ven como enemigos; al menos hasta antes de la crisis no habían desarrollado actitudes antisindicales [Fernández Macías, 2003].

Cierto que el intento de movilizar a los parados corre el riesgo de fracasar. El éxito no está garantizado. Pero ¿qué movimiento social lo tiene? ¿Lo tenían aquellas abuelas y madres cuando comenzaron a deambular por la Plaza de Mayo en 1977? ¿Las damas de blanco cubanas que hacen oír su voz desde 2003? ¿Las víctimas del accidente del metro de Valencia de 2006 que desde entonces han estado manifestándose el día 3 de cada mes y sólo recientemente —con la salida del PP del Gobierno de la Generalitat en la primavera de 2015— han comenzado a ser escuchadas?

Cuando estalla un movimiento hasta el observador más avisado suele ser cogido por sorpresa. Si los sindicatos no lo intentan 4

con los parados corren otro riesgo aún mayor, a saber, que el movimiento acabe apareciendo a pesar de todo poniéndolos en evidencia y restándoles la credibilidad que les queda.

Como la de todos los movimientos, la lucha de los parados será larga, pero no parece que haya demasiadas alternativas.

En todo caso es imprescindible oponerse al discurso dominante con otro que desenmascare el carácter político del problema y anime a la ciudadanía a combatirlo.

Quiero pensar que el día en que un movimiento de parados consiga contrarrestar la resignación asentando en la opinión pública la convicción de que no estamos ante una maldición bíblica, el día en que un partido político no pueda llegar al Gobierno sin comprometerse a atacarlo por vía directa, el drama del paro comenzará a resolverse.

Í